

LA HONORABLE CONVENCION CONSTITUYENTE DE ENTRE RIOS SANCIONA EL SIGUIENTE ARTICULO:

“Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna sin necesidad de acreditar interés alguno. La respuesta deberá ser en forma amplia, gratuita y dentro del plazo que establezca la reglamentación. Se podrá requerir información a cualquiera de los tres poderes del Estado provincial y municipal; a entes, sociedades, empresas u organismos en los que el Estado tenga participación; a las personas físicas o jurídicas que reciban subsidios o aportes estatales; a las empresas privadas que tengan la concesión de un servicio público y a las que desarrollen una actividad o impulsen un proyecto con impacto ambiental.

El principio es la publicidad de toda la información pública, salvo las excepciones previstas por ley y que debidamente justificadas resulten necesarias en una sociedad democrática. La mora en suministrar la información solicitada o la denegatoria, que deberá ser expresada mediante acto fundado, admitirá la interposición de la acción de amparo”.

FUNDAMENTOS

Buscar y recibir información es un derecho fundamental consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, tratados todos que fueron incorporados a la Constitución de la Nación.

Así lo consideró también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Claude y otros vs. Chile”, que sirvió no sólo para condenar a ese Estado a entregar la información solicitada. El fallo marcó además un imperativo para toda la región, al obligar a adoptar medidas legislativas y ejecutivas para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Ligado a la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información pública guarda íntima vinculación con el principio de publicidad de los actos de gobierno, uno de los pilares en los que se asienta el sistema republicano.

Es que el acceso a la información pública no sólo permite el ejercicio de otros derechos humanos. Resulta además un elemento imprescindible para concretar la participación ciudadana en los asuntos públicos y supone la garantía de un estándar de mejora progresiva de los derechos humanos.

En la provincia de Entre Ríos el derecho de acceso a la información pública está reglamentado a través del decreto 1.169/05 GOB, con alcance limitado a los organismos que dependen del Poder Ejecutivo y vigente desde julio de 2005.

Se trata de una norma similar a la que rige a nivel nacional desde diciembre de 2003 y poco conocida, porque como sucede en el ámbito federal, el Estado no impulsó una campaña de difusión para promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Si bien la Oficina Anticorrupción y Ética Pública (OAEP) puso en marcha en el año 2006 un Servicio de Orientación Ciudadana, desde el organismo se reconoció que las consultas efectuadas fueron poco significativas.

Por eso, a pesar de la vigencia del decreto 1.169/05 GOB, la cultura del secretismo sigue imperando en Entre Ríos. Así lo confirman la falta de respuesta a pedidos de acceso a información pública, las denuncias ante la OAEP por incumplimiento del Reglamento de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo y el desconocimiento de la norma puertas adentro de la administración pública, especialmente sobre los plazos para responder con que cuentan los funcionarios.

La Ley 9.768, que declaró la necesidad de reformar la Constitución de la provincia de Entre Ríos y habilitó la discusión de una cláusula que reconozca el derecho de acceso a la información pública, fue votada por muchos de los diputados que impidieron la discusión de dos proyectos para reglamentar la presentación de pedidos de información a los tres poderes del Estado.

Y la mayoría de los senadores que el año pasado se manifestaron por la necesidad de reformar la Constitución fueron los mismos que evitaron aprobar un proyecto de ley de ética pública enviado por el Poder Ejecutivo en noviembre de 2006.

Sin embargo también hay señales en otro sentido, o al menos así se pretendió demostrar con el recientemente inaugurado procedimiento de elaboración participada de normas. Dispuesto a través del decreto 246/07, el Poder Ejecutivo propuso así iniciar el debate para la eventual sanción de una ley de acceso a la información pública.

Todo lo expuesto torna indispensable que la sociedad civil impulse el reconocimiento del derecho de acceso a la

información pública en la Constitución de Entre Ríos, puesto que se trata de una herramienta de transformación social que no puede ser considerada patrimonio de periodistas, abogados u organizaciones no gubernamentales, sino de todos los entrerrianos.

Resulta imposible pensar la participación ciudadana y el control de los actos de gobierno sin acceso a la información pública. Y las políticas de transparencia que no cumplen con este requisito son meros enunciados.

Por todo eso, y teniendo en cuenta el interés de los señores convencionales en mejorar la calidad institucional de esta provincia, solicitamos el tratamiento y aprobación del proyecto que ponemos a consideración.